

## **Chilapa, la saga asesina de *Los Ardillos***

Luis Hernández Navarro

12 de mayo de 2026

La Jornada

A Isaías Lucas lo asesinó el grupo *narco-paramilitar Los Ardillos* en la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa. Pasaban las 7 de la mañana del pasado 6 de abril, cuando pistoleros le dispararon desde una camioneta blanca, blindada, quitándole la vida. Sus compañeros llevaban dos años solicitando su incorporación al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero le fue negado.

Isaías no estaba solo. Lo acompañaban Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario. También los asesinaron. Se dedicaban a la albañilería y construían una casa.

Tanto la comunidad de Xicotlán como la de Tula, de donde eran originarios, son parte del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Formaban parte del sistema de justicia de la Montaña Baja de Guerrero: eran de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Hasta ahora, 67 integrantes de la organización han sido asesinados y 26 desaparecidos por *Los Ardillos*.

La Cipog-EZ es integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que data, al menos, de 1992. Se fundó formalmente en 2008, alrededor de la colonia Emperador Cuauh-témoc, en Chilpancingo, donde vivía el dirigente Cirino Plácido. Sus orígenes se remontan a la lucha de los pueblos na savi, me'pháá, nahua y ñamnkúé, quienes desde 1992 comenzaron a pelear por su derecho a la autonomía y libre determinación y formaron el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia.

La CRAC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec, el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la justicia a través de la reducción: trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los grupos criminales.

Los asesinos armados de Isaías y sus compañeros tuvieron que cruzar de ida y vuelta el cruce del Jagüey, donde hay un cuartel del ejército. Ese punto está a menos de 15 minutos de distancia de Xicotlán. Los soldados no vieron nada.

*Los Ardillos* tienen el control del Chilapa; antes lo dominaban *Los Rojos*. Fueron parte del cártel de los Beltrán Leyva. El grupo siembra, procesa y vende drogas, extorsiona, cobra derecho de piso, secuestra, asesina, tortura, desaparece, quema negocios y transporte público, y hasta toma la ciudad de Chilpancingo.

Durante las últimas cuatro administraciones, *Los Ardillos* han gobernado el municipio de Chilapa. Aldy Esteban Román, el alcalde anterior, ahora es diputado local por el PRI. Formalmente, la ciudad está gobernada por el PRI-PRD, aunque en otras alcaldías, como Chilpancingo, caminan con Morena.

La presidenta municipal para el periodo 2024-2027 es Mercedes Carballo Chino, cuñada de Celso Ortega Jiménez, identificado por la Fiscalía General del Estado como el líder del grupo criminal. Quien realmente gobierna el ayuntamiento es el hijo de Celso.

Diversas denuncias señalan que el diputado del PRD Bernardo Ortega es hermano de Ivan Ortega y Celso Ortega, líderes del clan. Su padre estuvo preso por el asesinato de dos agentes de la AFI y fue ejecutado al salir libre. Su trama, sin embargo, va mucho más allá de Chilapa y les permite actuar impunemente. Controlan alcaldes y policías municipales, estatales y ministeriales.

Desde el pasado miércoles 7, *Los Ardillos* atacaron con armas de grueso calibre y drones a las comunidades de Chicotlán, Tula y Acahuetlán. Las balaceras no cesan. Más de mil familias, en su mayoría mujeres y niños, fueron desplazadas. Muchos tuvieron que resguardarse en Coszacán. Lo que sorprende es que en Tula hay un cruceiro en el que se estableció un control del Ejército. Sin embargo, según los desplazados, el 6 de abril los soldados salieron de allí y el paso quedó para que entraran los *narco-paramilitares*. Lo mismo sucedió en el retén que estaba en el cruceiro de Jagüey, y otro más estaba en el Cerro Cruz de la comunidad de Tula, en la parte alta. Todos los soldados salieron de allí. Y mientras estuvieron, nunca detuvieron a la gente armada.

La madrugada del martes, en la carretera con dirección a Tlapa, aparecieron los restos de cuatro personas. Entre ellas están José Guadalupe Ahuejote y Víctor Ahuejote Arribeño, de Xicoltán.

Desde 2019, *Los Ardillos* han tratado de controlar –aparte del municipio de Quechultenango, donde tiene su centro de operaciones– los territorios rumbo a la Montaña Baja y Alta. En la primera se ubican Chilapa y Hueycantenango, localidad indígena bajo su férula.

El 15 de enero de 2019, *Los Ardillos* incursionaron violentamente en las comunidades que dieron vida a la CRAC-PF. Desplazaron a habitantes de Tula, Tepila y Xicotlán. Lo que ahora está pasando es una repetición de aquella agresión. En Tepila, *Los Ardillos* desaparecieron a 30 personas de 30 familias distintas. La situación se tornó muy grave. Durante casi un año, prácticamente, desaparecieron de allí a la CRAC-PF.

Sin embargo, la CRAC-PF se reorganizó. Y, el 27 de diciembre, rompió el cerco y recuperó su territorio. En ese enfrentamiento hubo muchas muertes. Desde entonces y hasta ahora, la situación ha sido muy tensa.

El objetivo de *Los Ardillos* con estos ataques es conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad de Tula, en la parte alta de la Montaña, y eliminar a los indígenas que se les oponen. Como la resistencia y autonomía de las comunidades les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios.

Hay que frenar la saga criminal de *Los Ardillos*. La justicia debe llegar a Chilapa, como debe llegar a todo el estado de Guerrero. Es hora de que las comunidades puedan vivir en paz.

X: [@lhan55](https://twitter.com/lhan55)

<https://www.jornada.com.mx/2026/05/12/opinion/013a1pol>